

Guía para la elaboración del
**REGLAMENTO GENERAL
DEL CONCEJO MUNICIPAL**



DIRECTOR:

Juan Carlos Núñez V.

COORDINADOR ÁREA DE FORMACIÓN:

Herbert Irahola F.

EQUIPO TÉCNICO:

Mónica Reyes L.

EDICIÓN:

Jorge Jiménez

CORREO: fundajub@jubileobolivia.org.bo

TELÉFONO: (591-2) 2125177 - 2154641

DIRECCIÓN: Calle Quintín Barrios N° 768
Sopocachi, La Paz – Bolivia



DIRECTOR:

Víctor Hagemann

COORDINADORA DE PROYECTOS:

Danea Vacaflor

CORREO: bolivia@hss.de

TELÉFONOS: (591-2) 2416162

DIRECCIÓN: Calle Ecuador N° 2523
Edificio Dallas, Piso 11
Sopocachi, La Paz - Bolivia

2022

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	4
INTRODUCCIÓN	5
PRIMERA PARTE: LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL	7
1.1. PRIMERA FASE: ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO	8
1.1.1. Selección concertada de actores para la realización de entrevistas.....	9
1.1.2. Elaboración de una guía general de entrevistas.....	10
1.1.3. Revisión documental	11
1.1.4. Desarrollo de las entrevistas	11
1.2. SEGUNDA FASE: ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA	11
1.2.1. Selección y priorización de actores claves para el desarrollo de mesas técnicas.....	12
1.2.2. Desarrollo de espacios de diálogo a través de mesas técnicas	13
1.3. TERCERA FASE: APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL.....	15
SEGUNDA PARTE: CONTRIBUCIONES PARA LA CONSIDERACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL	19
2.1. CONSIDERACIONES NORMATIVAS	19
2.2. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO Y REDACCIÓN DE UN REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL	23
TERCERA PARTE: SÍNTESIS DEL DEBATE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN LA EXPERIENCIA DE LA MESA TÉCNICA DE LA PAZ Y SU CONSISTENCIA CONSTITUCIONAL Y NORMATIVA	31
3.1. SOBRE LA ESTRUCTURA DEL CONCEJO MUNICIPAL	31
3.1.1. Definición de la Directiva del Concejo	32
3.1.2. Coordinación interinstitucional fuera del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz	32
3.1.3. Débil capacidad de gestionar institucionalmente	32
3.2. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS	32
3.2.1. Producción de normativa	32
3.2.2. Procedimientos no legislativos	33
3.2.3. Conformación de la directiva y comisiones	33
3.2.4. Desarrollo de las sesiones	33
3.2.5. Acto de votación al interior del Concejo	33
3.2.6. Concejales y concejales suplentes	34
3.3. LABOR DE FISCALIZACIÓN	34
3.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35
3.5. APROBACIÓN DE LA MESA TÉCNICA	37
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	39



PRESENTACIÓN

A 12 años de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley N° 031) y a casi 30 años de la experiencia de la participación popular y el municipalismo en Bolivia, es evidente que la gestión pública local, con 339 entidades territoriales autonómicas, como los gobiernos autónomos municipales, han desarrollado una importante experiencia en el ejercicio de sus competencias en sus instancias ejecutivas y legislativas, convirtiéndose en un espacio de desarrollo de la institucionalidad democrática mucho más cercano a las ciudadanas, ciudadanos y organizaciones de sociedad civil de distinto tipo.

El año 2014 se aprobó la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, la misma que establece una diferenciación de gestión de planificación y presupuesto entre el nivel ejecutivo y los concejos municipales cuando estos municipios superen los 50.000 habitantes. En esa realidad, son solo 22 municipios que tendrían esas características que, además, se complementan con mejores capacidades institucionales, tanto de recursos humanos, presupuesto público y factibilidad para el desarrollo de gestiones que mejoren la calidad de vida de la población.


En contraste, tenemos a 216 municipios con menos de 10.000 habitantes, donde el tema crítico es precisamente su factibilidad como

instancia pública que responda a las necesidades de desarrollo y calidad de vida de la población, en especial cuando vemos municipios tan dependientes de los recursos de coparticipación e IDH que vienen desde el nivel central y que van en una preocupante disminución en los últimos años.

En este sentido, en Bolivia tenemos 199 municipios con la necesidad de fortalecer su institucionalidad y los espacios de participación de la sociedad; que principalmente promuevan la transparencia, el acceso a información y la legitimidad de la gestión, que redunden en buenas bases de gobernabilidad en el ámbito local - municipal.

Con ese objetivo de fortalecer la institucionalidad democrática de los gobiernos autónomos municipales a partir de la promoción de espacios de participación ciudadana y transparencia es que, durante los años 2021 y 2022, se ha desarrollado entre Fundación Jubileo y Hanns Seidel Stiftung - Oficina Bolivia el proyecto "Fortalecimiento del Órgano Legislativo del Municipio de La Paz para la promoción de la Participación Ciudadana".

En este proceso hemos encontrado la voluntad política y apertura de la Presidencia del Concejo Municipal de La Paz, en la gestión del concejal Jorge Dulón y su equipo de asesores, con quienes se ha identificado la necesidad de la actualización



del Reglamento del Concejo Municipal, el mismo que data de hace casi 20 años y que necesitaba de una nueva propuesta compatible con la actualidad normativa y de promoción de espacios de participación de la sociedad que sean acordes a los principios de la democracia participativa.

Esta experiencia se ha nutrido de mesas técnicas multiactor y entrevistas a profundidad con una diversidad de actores políticos y expertos en el tema legislativo municipal, es así que se ha contado con ex concejales y concejales municipales de La Paz de gestiones anteriores (tanto de oficialismo como de oposición), que contribuyeron de manera cualitativa en temas clave para el diagnóstico y la propuesta de actualización del Reglamento del Concejo Municipal.

Esta guía recoge esa experiencia, los temas centrales de debate para la actualización de un reglamento de la instancia legislativa municipal, con un aporte importante de análisis de consistencia constitucional; así como plantea una propuesta para el fortalecimiento de la democracia participativa.

La propuesta puede ser replicada en otros contextos locales con las adecuaciones necesarias en función a la realidad legislativa de cada municipio; por ello, consideramos este material como un aporte referencial y metodológico para contribuir eficazmente a la legislación municipal, entidad fundamental para el desarrollo de los municipios de Bolivia.

Victor Hagemann
Director
Hanns Seidel Stiftung – Bolivia

Juan Carlos Núñez
Director Ejecutivo
Fundación Jubileo



INTRODUCCIÓN

Con la entrada en vigor de la nueva Constitución Política del Estado, en febrero de 2009, se inauguró un periodo para la vida política y administrativa de los municipios bolivianos. Aunque la historia del municipalismo puede rastrearse prácticamente hasta el inicio de la República –en términos jurídicos presente en la Constitución de 1839¹ y en términos histórico políticos a partir de la Constitución de 1880²– es con la Ley de Participación Popular, en la década de 1990, que la gestión pública municipal toma la relevancia más amplia hasta el momento con la elección de gobiernos municipales en todas las secciones de provincia y la dotación de recursos. Sin embargo, este proceso de descentralización política, económica y administrativa tuvo un momento de búsqueda de mayor profundización con el Estado Plurinacional y Autónomico definido en la Constitución de 2009.

Una de las características diferenciadoras más importantes, en el marco de la autonomía municipal, es la separación, no financiera, de los órganos

Legislativo y Ejecutivo; como también en las funciones de ambas instancias buscando, de esta manera, cumplir con las competencias dadas por el marco normativo vigente a los gobiernos autónomos municipales que como propósito final está el satisfacer las necesidades y demandas ciudadanas.

Bajo estos criterios fundamentales, uno de los aspectos principales para una gestión legislativa municipal, adaptada al nuevo marco jurídico e institucional definido por la nueva Constitución y las leyes que le dan forma, es la necesidad de modernizar y renovar las estructuras y los procesos que regulan cómo sus partes se relacionan entre sí y con otras instancias, especialmente con la ciudadanía. Este aspecto es de vital importancia no solamente para los municipios bolivianos, sino como un paradigma general³.

Los concejos municipales, en este nuevo marco, son la instancia legislativa, fiscalizadora y deliberativa dentro de los gobiernos autónomos municipales. Buscan representar la diversidad de

-
- 1 Rodríguez Ostria, Gustavo. 1995. *Estado y municipio en Bolivia*. La Paz: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente / PNUD.
 - 2 Zuazo, Moira. “Bolivia: cuando el Estado llegó al campo. Municipalización, democratización y nueva Constitución”. En Moira Zuazo, Jean-Paul Faguet y Gustavo Bonifaz (eds.), *Descentralización y democratización en Bolivia. La historia del Estado débil, la sociedad rebelde y el anhelo de democracia*. La Paz: Friedrich Ebert Stiftung.
 - 3 Tudela Aranda, José. 2010. “La administración parlamentaria en la encrucijada de la renovación”. En Corts: *Anuario de Derecho Parlamentario*, Número 23, pp. 157-191.

cada municipio, en especial de los más grandes demográficamente, donde la interculturalidad se expresa con mayor fuerza. Así, la tarea de estos órganos para el funcionamiento de las autonomías municipales es vital, tanto en un sentido administrativo como político.

La presente guía recoge la experiencia del proyecto “Fortalecimiento del Órgano Legislativo del Municipio de La Paz para la Promoción de la Participación Ciudadana” que es implementado a partir de la carta de entendimiento suscrita entre la Presidencia del Concejo Municipal de La Paz y Fundación Jubileo.

En este proceso, Fundación Jubileo cumple el rol de facilitador, con apoyo de Fundación Hanns Seidel.

La aplicación del acuerdo derivó en la elaboración participativa de una propuesta de Reglamento General del Concejo Municipal de La Paz, cuya trayectoria se sintetiza en este documento a partir de la descripción, con sus respectivas recomendaciones, de tres fases generales: una fase diagnóstica; una fase de elaboración de la propuesta, a cargo de una mesa técnica; y una fase de aprobación de la propuesta.

FASES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Del Reglamento General del Concejo Municipal



PRIMERA PARTE:

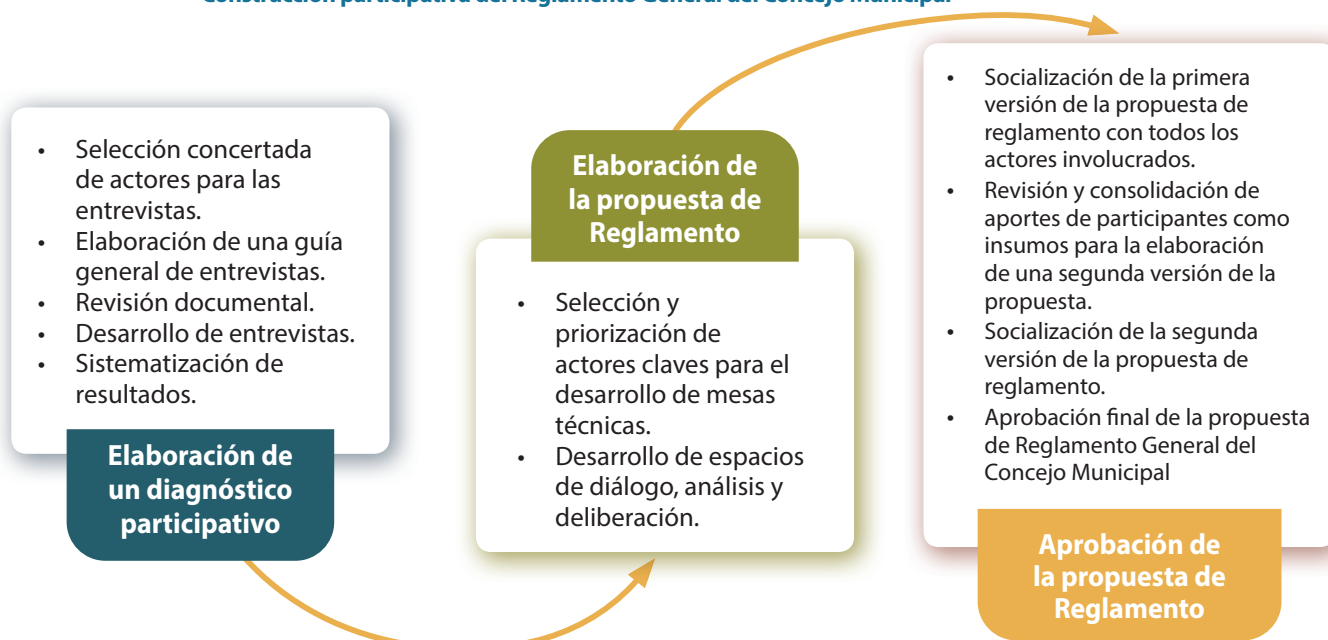
LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL

Esta primera parte se concentra en la propuesta metodológica para la elaboración de reglamentos generales del Concejo Municipal.

El enfoque principal es el desarrollo de un proceso sistematizado de varias etapas, presentando especial atención a la participación

de las partes y segmentos interesados, haciendo que se involucren en las discusiones desde las etapas iniciales del proceso, no solo para que contribuyan de manera efectiva a la elaboración de la reglamentación, sino también para consolidar su apoyo y legitimar su adopción.

ESQUEMA METODOLÓGICO Construcción participativa del Reglamento General del Concejo Municipal



1.1. PRIMERA FASE: ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Es la etapa fundacional del trabajo. El objetivo de este primer proceso es doble; por un lado, se debe procurar **analizar el estado de situación de la gestión del Concejo Municipal** y, por otro, se debe **involucrar a la mayor cantidad y pluralidad de actores en el proceso de consulta**.

Para alcanzar ambos objetivos es necesario recurrir a herramientas de la investigación social, concretamente a las de índole cualitativa, con el fin de alcanzar coherencia entre el método empleado en función del objetivo de la investigación y el tipo de datos que se trate.

En este sentido, si el objetivo de esta investigación es identificar los aspectos más sensibles e importantes a mejorar en la labor del Concejo Municipal, la herramienta cualitativa más apta para alcanzar este fin es la realización de entrevistas en profundidad.

“Las entrevistas resultaron ser el mejor instrumento de recolección de información profunda sobre la labor del Concejo Municipal de La Paz, más allá de la “letra muerta” de la normativa.”

El motivo de la idoneidad de las entrevistas recae en que la labor de una institución no solamente depende de los instrumentos formales que son susceptibles de análisis directo, sino que la aplicación real y los micromecanismos de interrelación entre actores e instancias dentro y fuera de la institución que hace al objeto de estudio son vitales para determinar cómo funcionan realmente los instrumentos formales.

Entre los tipos de entrevistas, se recomienda el uso de **entrevistas semiestructuradas** que respondan a elementos generales previamente definidos; pero que, al mismo tiempo, tengan la flexibilidad suficiente para permitir ajustes según cada conversa en específico.

Los elementos generales más comunes, en este caso en particular, son: la **estructura** y los **procedimientos** del Concejo Municipal, su **labor de fiscalización** y todos los **aspectos concernientes a los canales y mecanismos de participación ciudadana**, entendida de manera amplia como parte del ejercicio democrático.

Así, los pasos a seguir para asegurar el cumplimiento de ambos objetivos son:

1.	Selección concertada de actores a quienes se requiere entrevistar
2.	Elaboración de una guía general de entrevistas
3.	Revisión documental
4.	Desarrollo de entrevistas
5.	Sistematización de resultados

Adicionalmente, se sugiere complementar estos resultados con un análisis documental siempre que sea posible. Cada uno de estos pasos se detallan a continuación:

1.1.1. Selección concertada de actores para la realización de entrevistas

La **selección de actores** es la pieza fundamental para el proceso. Dado que la realización de entrevistas es limitada en términos de la cantidad de personas que se toman en consideración y, por ende, no se pretende alcanzar una muestra representativa de una población mayor, los criterios para seleccionar a quiénes se va a entrevistar son distintos a los criterios numéricos.

Se trata de lograr cubrir criterios cualitativos sensibles a cada contexto.

Entre las características mínimas a cubrir para esta selección se mencionan:

- Respetar y representar la diversidad y pluralidad política del municipio en, al menos, las dos gestiones anteriores inmediatas.
- Considerar a actores sociales relevantes para la gestión pública municipal.
- Contemplar a personal administrativo dentro del concejo municipal y/o en instancias del nivel Ejecutivo que tengan relación directa con el Concejo.

Todo este proceso de selección debe realizarse en coordinación y consenso con las autoridades del Concejo Municipal. De esta manera, será posible identificar otras características que sean necesarias considerar según la especificidad de cada municipio.

La cantidad de entrevistados estará en función de estas y otras características del municipio, con una perspectiva de la configuración social y política actual, pero también sopesando el pasado inmediato.

La idea es recuperar las visiones, percepciones y experiencias de personas que, desde distintos ámbitos, están involucradas con la gestión pública municipal.

En la experiencia de La Paz, se optó por una selección concertada –entre el Concejo Municipal, a través de su Presidencia, y Fundación Jubileo- de 12 personas que permitió reflejar una muestra de la diversidad de actores que, en su momento, están involucrados en la gestión legislativa.

De esta manera, se entrevistaron a:

- Cuatro ex concejales/as de las gestiones 2010-2015 y 2015-2021, 2 del oficialismo y 2 de la oposición.
- Un ex asesor miembro de la bancada de oposición (2010-2015 y 2015-2021).
- El ex Director de Gabinete del Concejo Municipal de la gestión 2015-2021.
- La Directora de Gabinete del Concejo Municipal en ejercicio, 2021-2022.
- La ex Jefe de Unidad de Archivo del Despacho del Alcalde 2015-2021, como instancia clave en el Ejecutivo Municipal por su rol en el proceso de seguimiento a los instrumentos de fiscalización.
- Dos dirigentes integrantes del Órgano de Participación y Control Social de La Paz, seleccionados de manera aleatoria.
- Dos expertos profesionales residentes en otros municipios del país.

1.1.2. Elaboración de una guía general de entrevistas

La **elaboración de una guía general de entrevistas** tiene el propósito de evitar que la conversación se desvíe del objetivo, pero sin llegar a ser muy restrictiva para adaptarse a cada conversación particular.

A partir de un análisis previo de la situación específica del municipio sobre su normativa de funcionamiento (Reglamento) se procura que se definan o se ratifiquen los temas generales a seguir.

Los temas estándar son:

- **Estructura** del Concejo Municipal.
- **Procedimientos** legislativos y no legislativos del Concejo Municipal.
- Rol y herramientas de **fiscalización**
- Canales y mecanismos para la **participación ciudadana**

1.1.3. Revisión documental

La **revisión documental** o trabajo de gabinete no puede estar ausente ya que, al margen de lo

que va a significar la consistencia constitucional y la identificación del marco legal, se debe considerar el análisis del reglamento vigente del Concejo Municipal y, además, la existencia previa de otras propuestas de reforma o mejoras a los reglamentos, como insumos necesarios en la construcción de uno nuevo; cuya información podrá ser utilizada en el desarrollo de las entrevistas y ser sujeta de evaluación en cuanto a su alcance y consistencia legal durante el proceso.

“

En el caso de La Paz, se realizó el análisis de dos documentos:

- El Reglamento Interno del Concejo Municipal de La Paz, una propuesta realizada por la Presidencia del Concejo Municipal.
- Un documento enfocado fundamentalmente en temas de fiscalización, aportado por el ex concejal y ex Presidente del Concejo Municipal de La Paz, Pedro Susz.

”

1.1.4. Desarrollo de las entrevistas

Las entrevistas deben conducirse con conocimiento previo de la situación del gobierno autónomo municipal, del concejo municipal y sus configuraciones políticas actual y previas, y del reglamento vigente.

1.2. SEGUNDA FASE: ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

La **elaboración de la propuesta** es la fase más larga y delicada de todo el proceso, tanto en la organización, el desarrollo y los resultados.

Tomando como insumo los resultados del diagnóstico, previamente elaborado y plasmados en el documento base, se plantea que de los espacios organizados con los actores seleccionados salgan los insumos para una propuesta de reforma al reglamento del Concejo Municipal y/o a todos los instrumentos, jurídicos o no, para mejorar y modernizar la gestión legislativa. En este caso, también se recurren y adaptan algunas estrategias y herramientas cualitativas propias de la investigación social.



Una vía es abordar los espacios de construcción de la propuesta de manera similar a la conducción de grupos focales, característicos en procesos de investigación social y de mercado. El objetivo es la recopilación de información, experiencias y saberes de un grupo cuidadosamente seleccionado a partir no solo de sus vivencias personales, sino de la interacción de esas subjetividades con sus pares.

De esta manera, se abre la posibilidad a debates, reflexiones y deliberaciones colectivas que permitan superar las visiones particulares y arribar en consenso en la mayoría de las propuestas. Este abordaje es particularmente útil para entornos políticamente complejos o para el tratamiento de temáticas delicadas.

1.2.1. Selección y priorización de actores claves para el desarrollo de mesas técnicas

Al igual que en la fase de elaboración del diagnóstico, a través de la realización de entrevistas, un aspecto central es la **definición de las personas que acompañarán el proceso**. En este caso, sin embargo, la selección de actores

participantes es mucho más delicada e importante puesto que, además de cumplir con el criterio de **respeto y representación de la diversidad y pluralidad político-partidaria** de la composición del Concejo Municipal en las últimas gestiones (que significa considerar a oficialistas y opositores por igual), esta fase también debe tener en cuenta el perfil de las personas que serán invitadas.

Este perfil debe ser uno de mayor apertura al diálogo y la deliberación, de búsqueda de consensos por encima de todo, inclusive y, sobre todo, por encima de las posturas partidarias. Dentro de lo posible, la mayor parte las personas que vayan a participar en esta segunda fase deben ser distintas de aquellas que fueron entrevistadas para la fase diagnóstica.

El objetivo de esta cuidadosa selección es poder contar con espacios plurales, abiertos y propositivos con personas que, al haber sido parte de la gestión legislativa del municipio en periodos anteriores, conozcan los detalles del respectivo Concejo Municipal y puedan identificar en detalle las áreas de mejora.

El éxito o fracaso de la iniciativa depende de detalles como los actores seleccionados para el diagnóstico o para la construcción colectiva, considerando aspectos como su **filiación partidaria** o incluso algunas cuestiones más detalladas como su **personalidad**, especialmente en torno a la apertura para debates y deliberaciones sanas y predisposición de construir una propuesta que permita mejorar la gestión legislativa municipal, indistintamente de las barreras y los intereses partidarios de los actores actuales o pasados dentro del gobierno autónomo municipal.

1.2.2. Desarrollo de espacios de diálogo a través de mesas técnicas

Una vez seleccionadas las personas, se las debe contactar para asegurar su participación, habiendo definido las fechas, horas y lugares de reunión. Con los aspectos logísticos definidos se puede dar paso al inicio del desarrollo de los espacios de diálogo. La idea central es que las personas que forman parte de las mesas técnicas, que tienen experiencia y vivencias específicas dentro de la gestión del concejo municipal en un municipio determinado, sean quienes definan el rumbo de las principales modificaciones

“

En el caso de La Paz, el equipo impulsor de este proceso optó por la instalación de una mesa técnica para el desarrollo de la deliberación y el debate, conformado por ex concejales(es) en uno o más periodos de las últimas cuatro gestiones del municipio paceño.

Esta selección siguió y cumplió con criterios de diversidad en cuanto a las gestiones para contar con experiencias de transición (periodo 1999-2004) y de consolidación (periodo 2004-2010) dentro de la institucionalidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, así como con experiencias en el marco de la nueva Constitución Política del Estado (desde el periodo 2010 en adelante).

También se cumplió con el criterio de diversidad político-partidaria al contar con 3 ex autoridades electas de las bancadas mayoritarias y 3 minoritarias (oficialismo y oposición) en la correlación de fuerzas políticas en el municipio de La Paz.

Las(os) ex concejales convocadas(os) fueron, en orden alfabético de apellidos: Irma Castro, Mavel Machicado, Gabriela Niño de Guzmán, Kathya Salazar, Jorge Silva y Pedro Susz. Se destaca la participación de 2 ex presidentes del Concejo Municipal de La Paz y un decano por haber sido electo en 2 gestiones constitutivas.

El debate fue conducido por un experto en gestión y técnica legislativa y un abogado constitucionalista designados por las instituciones no gubernamentales intervinientes facilitadoras del proceso.

”

que debiera hacerse a la normativa que rige el funcionamiento y el accionar de esa instancia municipal.

Para un trabajo provechoso, en términos del tiempo de las personas que participan en la mesa técnica, se debe compartir el documento base producto del diagnóstico, como insumo para la reflexión y el debate.

En este sentido, se recomienda empezar cada sesión de deliberación de la mesa técnica con una breve exposición de lo que el diagnóstico identificó en cada temática desarrollada. Justamente, la cantidad de temas generales determinará la cantidad de sesiones que se deben llevar a cabo.

De esta manera, si el diagnóstico se trabajó sobre la base de los cuatro temas estándar, cada uno de ellos debe constituirse en un tema a tratar por la mesa técnica; si se desarrollaron otras temáticas de acuerdo con el contexto específico, se deben traducir también en sesiones de debate.

La metodología sugerida para el desarrollo de las sesiones es similar a un grupo focal. Esto quiere decir que luego de una exposición del tema general y los principales hallazgos del diagnóstico la conversación entre los miembros de la mesa debe ser fluida; de esta manera, las intervenciones no solamente se concentrarán en responder una(s) pregunta(s) concreta(s), sino que se podrán extraer lecciones a partir de las vivencias al interior del Concejo Municipal.

El trabajo de quienes estén organizando las sesiones se debe concentrar, justamente, en recoger las propuestas que surgen a partir de las experiencias específicas con miras a atender los puntos de inflexión determinados por el análisis de situación del municipio, su reglamento y su normativa.

El resultado final de estos espacios es una **propuesta de reglamento para el Concejo Municipal** que refleje a cabalidad las reflexiones y deliberaciones de la mesa técnica.

“

En la instalación de la mesa técnica, se hizo notar la necesidad de discutir el Reglamento del Concejo Municipal de La Paz, no como un cambio básico del instrumento existente, sino como un nuevo instrumento ajustado a las disposiciones y lineamientos de la Constitución Política del Estado vigente desde 2009.

Este cambio no es solamente normativo, sino que también hace a la esencia de los gobiernos municipales bajo la noción de autonomía y la obligatoriedad de separación administrativa de Órganos, aunque con limitaciones que vienen desde la administración central para alcanzar esto último.

”

Todo el proceso de elaboración de la propuesta de proyecto de reglamento debe estar asesorado por un/a profesional especialista en Derecho, preferentemente en Derecho Constitucional y con experiencia en gestión legislativa municipal. Este profesional se debe encargar de dar consistencia jurídica a las propuestas que se derivan de la reflexión y el debate, así como dar constancia de que un eventual control de constitucionalidad no rechazaría las propuestas.

Cabe mencionar que esta propuesta debe estar acompañada de un documento de solidez constitucional y de respaldo jurídico. De igual manera, con el fin de asegurar la transparencia del proceso y confirmar su amplitud y su carácter participativo, se sugiere acompañar la propuesta con un resumen de los debates.

1.3. TERCERA FASE: APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL

Una vez culminado el proceso anterior, la propuesta de reglamento general del Concejo

Municipal debe ser debidamente aprobado por todas las personas participantes en la mesa técnica o en los espacios de debate y deliberación. Esta fase final es la que determina si todo el proceso previamente realizado fue exitoso o no.

Dado que estas mesas técnicas deben ser un espacio plural y abierto para una construcción colectiva, se espera que la aprobación de la propuesta sea unánime, tanto en grande como en detalle. Esto requiere el desarrollo de los siguientes pasos previos.

El proceso de aprobación de la propuesta de reglamento no es una mera votación. En el espíritu de que esta última fase se corresponda con las fases anteriores, en cuanto a que prime la lógica cooperativa de la democracia, esta debe buscar alcanzar consensos entre quienes participaron en las mesas de debate y deliberación.

1° Socialización de una primera versión de la propuesta de reglamento con los actores de la mesa técnica

En primer lugar, una versión inicial de la propuesta debe socializarse entre todos los actores que fueron parte de su construcción colectiva; es decir, entre quienes formaron parte de la mesa técnica.

Esta socialización busca que cada participante pueda revisar el contenido en detalle y expresar sus críticas, dudas, comentarios y observaciones para que luego sean subsanadas. Esto implica que se comparta y se dé el tiempo suficiente para que las y los participantes de la mesa puedan revisarla en detalle.

2° Revisión y consolidación de aportes de las y los participantes como insumos para la elaboración de una segunda versión de la propuesta de reglamento

En segundo lugar, antes de la aprobación de la propuesta, el personal de apoyo debe consolidar todos los comentarios recibidos de las y los integrantes de la mesa técnica como resultado del paso previo enfocándose en (1) resaltar aquellos puntos que no tuvieron claridad para ser resueltos de manera instantánea y/o (2) los aspectos que entraron en contradicción, como resultado de la revisión de dos o más personas. Ambas cuestiones deben quedar identificadas con claridad para su tratamiento posterior en plenaria.

Se sugiere que los comentarios que puedan ser resueltos sin mayor debate sean atendidos de inmediato y reflejados en la propuesta.

3° Socialización de la segunda versión de la propuesta de reglamento

Culminados estos pasos previos, es posible llevar a cabo una última sesión de la mesa técnica en la que se resuelvan los puntos de divergencia con debate y reflexión colectiva, y, eventualmente, se aprueben todos los puntos de la propuesta.

Ante la imposibilidad de llegar a decisiones unánimes sobre uno o más aspectos dentro de la propuesta, es necesario registrar tales desacuerdos y las posturas que entran en conflicto.

“

La sesión de revisión se concentró en la discusión final de la propuesta de reglamento general, así como su eventual aprobación. Se puede concluir con alto grado de confianza que el desarrollo de los espacios de la mesa técnica fue verdaderamente deliberativo por un rico, amplio y profundo debate que permitió la conversación por encima de posturas políticas, partidarias e ideológicas, y alcanzó acuerdos sobre prácticamente todos los aspectos considerados.

Este documento síntesis recoge los principales aspectos de cada una de las sesiones para reflejar el curso del debate que derivaron en la aprobación de una propuesta articulada de reglamento general del Concejo Municipal.

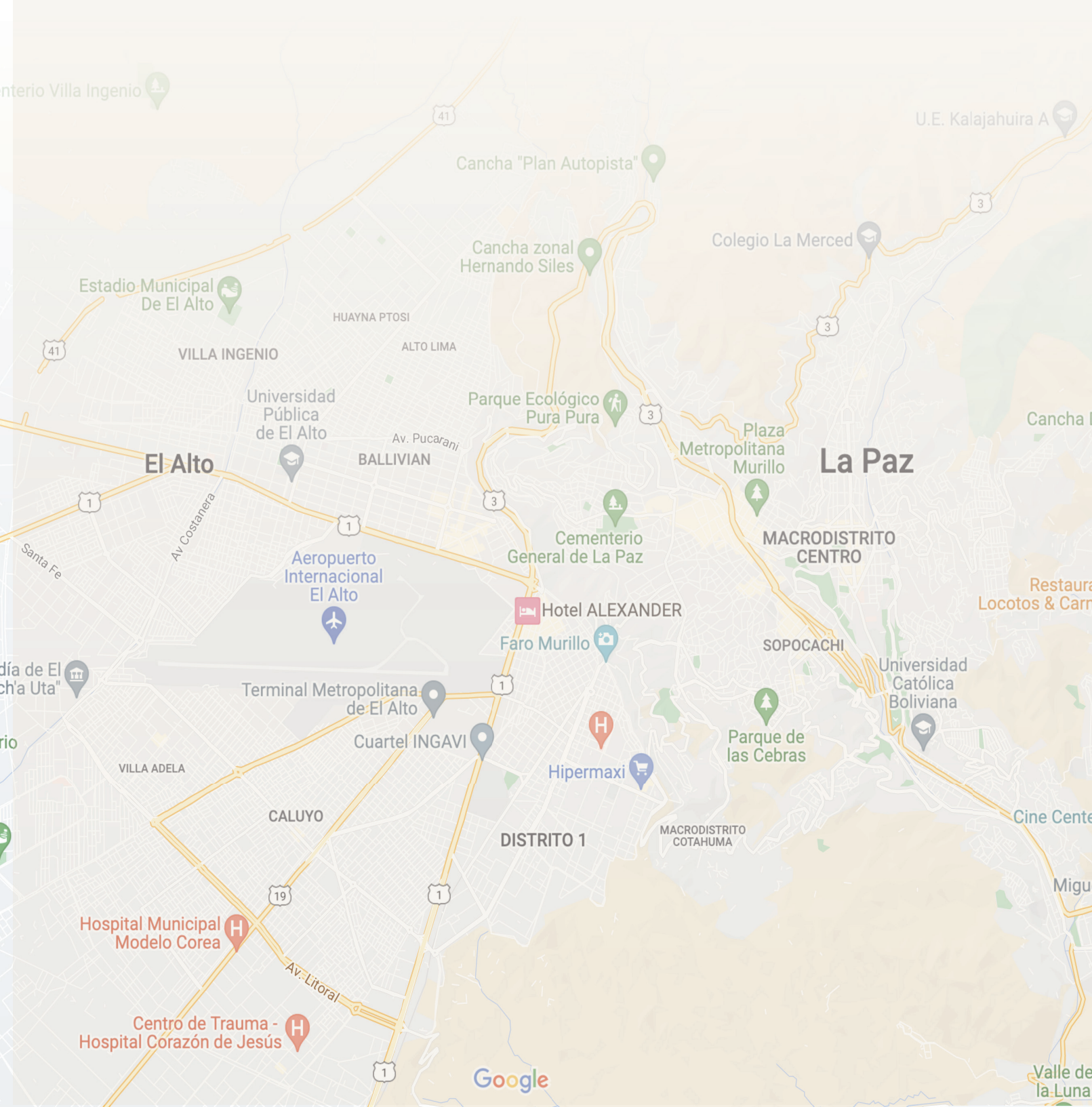
”

4° Aprobación final de la propuesta de reglamento general del Concejo Municipal

Una vez que se haya aprobado la propuesta y todas las observaciones hayan quedado atendidas, se sugiere que todavía se pueda compartir una última versión con todos/as los/as participantes de la mesa técnica para una última revisión en detalle y para confirmar la adopción de cualquier aspecto que haya quedado pendiente, por más de que sea de forma. Con esto, lo que se procura es que la versión final tenga una aprobación total.

“A partir de la experiencia inicial respecto del Concejo Municipal de La Paz, de más de 170 artículos en el proyecto de propuesta de reglamento general, solamente dos puntos quedaron sin una aprobación unánime debido a que todas las otras divergencias naturales en un proceso democrático de construcción colectiva y participativa se atendieron en el debate y la deliberación durante la etapa de construcción.”





nterio Villa Ingenio

U.E. Kalajahuira A

Cancha "Plan Autopista"

Cancha zonal
Hernando Siles

Colegio La Merced

Estadio Municipal
De El Alto

VILLA INGENIO

HUAYNA PTOSI

ALTO LIMA

Universidad
Pública
de El Alto

BALLIVIAN

Av. Pucarani

Parque Ecológico
Pura Pura

Plaza
Metropolitana
Murillo

La Paz

El Alto

MACRODISTRITO
CENTRO

Aeropuerto
Internacional
El Alto

Cementerio
General de La Paz

Hotel ALEXANDER

Faro Murillo

Restaurante
Locotos & Carn...

Edificio de El
Ch'a Uta"

Terminal Metropolitana
de El Alto

SOPOCACHI

Universidad
Católica
Boliviana

VILLA ADELA

Cuartel INGAVI

Parque de
las Cebras

CALUYO

DISTRITO 1

MACRODISTRITO
COTAHUMA

Hospital Municipal
Modelo Corea

Centro de Trauma -
Hospital Corazón de Jesús

Av. Litoral

Cine Centro

Migu...

Google

Valle de
la Luna

SEGUNDA PARTE:

CONTRIBUCIONES PARA LA CONSIDERACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL

Se propone una serie de puntualizaciones a ser considerada por los interesados para la elaboración de una propuesta de Reglamento General del Concejo Municipal (RGCM) de un gobierno autónomo municipal determinado, básicamente como marco normativo y legal supra sobre el cual se podrá plantear, posteriormente, un reglamento general del Concejo Municipal.

2.1. CONSIDERACIONES NORMATIVAS

La Constitución Política del Estado, vigente desde el 7 de febrero de 2009, redefine el tipo de Estado y sus características, forma de gobierno y democracia; incluso la estructura funcional de sus órganos del poder público y organización territorial. Particularmente, en cuanto a la forma de Estado, mantiene su forma unitaria, pero con reconocimiento expreso de autonomías, en el que se establece cuatro niveles decisorios con capacidad legislativa:

- 1) El nivel central del Estado para el Estado boliviano.
- 2) El gobierno autónomo departamental para el ámbito de jurisdicción.
- 3) El **gobierno autónomo municipal** en el ámbito de su jurisdicción.
- 4) Las autonomías indígenas originario campesinas (instancia que identifica su Estatuto de acuerdo con sus propias instituciones).

Órganos legislativos

- 
- (1) Asamblea Legislativa Plurinacional
 - (2) Asamblea Legislativa Departamental
 - (3) Concejo Municipal
 - (4) Autonomías Indígena Originario Campesinas

En ese sentido, el artículo 272 de la norma suprema señala:

“La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones.”

En lo que respecta a la autonomía municipal, el artículo 283 expresa:

“El gobierno autónomo municipal está constituido por un concejo municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la alcaldesa o el alcalde”.

Entre las normas de desarrollo mencionadas se encuentra la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Bóveda”, de 19 de julio de 2010, que entre sus objetos tiene regular el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico financiero y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. En lo referente a las autonomías municipales, el artículo 33 dispone:

“Todos los municipios existentes en el país y aquellos que vayan a crearse de acuerdo a ley, tienen la condición de autonomías municipales sin necesidad de cumplir requisitos ni procedimiento previo. Esta cualidad es irrenunciable y solamente podrá modificarse en el caso de conversión a la condición de autonomía indígena originaria campesina por decisión de su población, previa consulta en referendo.”

Asimismo, el artículo 34 puntualiza:

“Artículo 34. (GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL). El gobierno autónomo municipal está constituido por:

I. Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. Está integrado por concejales y concejales electas y electos, según criterios de población, territorio y equidad, mediante sufragio universal, y representantes de naciones y pueblos indígena originario campesinos elegidos y elegidas mediante normas y procedimientos propios que no se hayan constituido en autonomía indígena originaria campesina, donde corresponda.

II. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una alcaldesa o un alcalde e integrado, además, por autoridades encargadas de la administración, cuyo número y atribuciones serán establecidos en la carta orgánica o normativa municipal. La alcaldesa o el alcalde será elegida o elegido por sufragio universal en lista separada de las concejalas o concejales por mayoría simple.”

Además, el artículo 35, referido al Concejo Municipal, dispone: **“La carta orgánica deberá definir el número de concejalas o concejales y la forma de conformación del Concejo Municipal,** de acuerdo a la Ley del Régimen Electoral.” disposición que, en lo que refiere al ámbito de conformación del Concejo Municipal se remite a lo dispuesto por la carta orgánica, situación que tiene un tratamiento diferenciado respecto a municipios que carecen de carta orgánica.

Como se señaló, los municipios que a la fecha no cuentan con carta orgánica deben regirse a la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales de 9 de enero de 2014, como norma supletoria conforme señala la misma en el artículo 2 y de acuerdo al razonamiento establecido por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2055/2012, de 16 de octubre de 2012, que en lo pertinente establece:

“...Por ello, cabe precisar que la norma supletoria en el marco del texto constitucional contiene los siguientes alcances:

1. Cuando las entidades territoriales autónomas aún no hubieren ejercido de manera efectiva sus competencias y no hubieren legislado sobre las mismas se aplica de manera supletoria la legislación nacional preconstitucional vigente hasta que la entidad territorial autónoma legisle sobre esa competencia que le ha sido asignada por la CPE.

2. La supletoriedad procederá con una norma postconstitucional únicamente en el caso específico de la legislación para los gobiernos locales, en correspondencia a lo dispuesto en el parágrafo IV del art. 284 de la CPE, que contempla el mandato potestativo de la elaboración de las cartas orgánicas. Por ello, para aquellos gobiernos autónomos municipales que decidan no contar con una carta orgánica, serán regulados por la ley de gobiernos locales que emita el nivel central del Estado.”

Con base en lo señalado, la Ley N° 482, en lo que respecta al Concejo Municipal y sus atribuciones, en el numeral 1) del artículo 16, establece como atribución: **Elaborar y aprobar el Reglamento General del Concejo Municipal, por dos tercios de votos del total de sus miembros**, determinando una reserva de fuente, de nombre y el voto cualificado para su aprobación.

Este reglamento general, al ser una **norma de manejo y aplicación interna**, debe ser aprobado mediante resolución municipal, de acuerdo con la jerarquía normativa establecida en el inciso b) del artículo 13 de la citada Ley; cuya consistencia legal deberá ser corroborada mediante Control Normativo Previo de Constitucionalidad. Tal el caso del proyecto de carta orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Real de Tapacaré, cuya **Declaración Constitucional Plurinacional N° 0035/2014, de fecha 27 de junio de 2014**, en una parte sustancial, señala las facultades regulatorias de un concejo municipal.

“En este marco, y para el análisis específico del numeral en cuestión, conviene profundizar en el estudio de las facultades legislativa y reglamentaria, a las que, en su conjunto, podríamos denominar como capacidades normativas o regulatorias, pues tienen como finalidad el emitir normas en el más amplio sentido del término para regular determinados hechos o actos con repercusiones jurídicas. De esta forma, **las facultades regulatorias** del Concejo Municipal son, en realidad, de dos tipos: **a) Las legislativas propiamente dichas**, es decir, la capacidad de emitir leyes propiamente dichas; y, **b) Las reglamentarias**, pero en este caso de carácter interno, restringidas solo a viabilizar el ejercicio de sus atribuciones y competencias propias del órgano; por ejemplo, la aprobación del Reglamento de Debates del Pleno y las comisiones del Concejo Municipal. Por su parte, las facultades normativas del Órgano Ejecutivo municipal se limitan al ámbito de lo estrictamente reglamentario, pero dentro del cual se identifican importantes matices y que se materializan en: 1) Una capacidad reglamentaria de carácter general, es decir, que deviene en reglamentos de observancia obligatoria para todos los estantes y habitantes del territorio municipal, emitidas con la finalidad esencial de viabilizar el cumplimiento de las leyes municipales; y, 2) Una capacidad reglamentaria de carácter interno destinada a permitir el ejercicio de sus atribuciones propias; por ejemplo, la aprobación de un Reglamento de Viáticos para los funcionarios del Ejecutivo.”

Bajo tales antecedentes, el RGCM es una **norma jurídica de carácter interno** y por ello **debe ser aprobado mediante resolución autonómica municipal** y con el número de votos establecido en dicha disposición. Asimismo, se sugiere tomar en cuenta los precedentes establecidos en las siguientes resoluciones constitucionales en lo que respecta al tema **autonómico**:

- Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2055/2012, de fecha 16 de octubre de 2012, que realizó el control de constitucionalidad respecto de la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización.
- Declaración Constitucional Plurinacional N° 0001/2013, de fecha 12 de marzo de 2013, que realizó el control de constitucionalidad de cartas orgánicas, concretamente del municipio de Cocapata.
- Declaración Constitucional Plurinacional N° 0035/2014, de fecha 27 de junio de 2014, que realizó el control de constitucionalidad de cartas orgánicas, concretamente del municipio de Villa Real de Tapacarí.
- Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0296/2014, de fecha 12 de febrero de 2014, que establece parámetros sobre la facultad tributaria de los municipios.
- Sentencia Constitucional Plurinacional N° 107/2015, de fecha 16 de diciembre de 2015, donde se establece la separación e independencia de órganos.
- Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0992/2016-S3, de fecha 22 de septiembre de 2016, que define los alcances de las facultades reglamentarias de ambos órganos municipales.
- Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0043/2016, de fecha 05 de abril de 2016, que establece la forma de cálculo de votación dentro de los concejos municipales.

2.2. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO Y REDACCIÓN DE UN REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL

Se presenta una serie de recomendaciones para el diseño y redacción del reglamento general del Concejo Municipal.

1. **Respecto a los títulos.** Asumiendo los postulados y directrices de técnica legislativa se debe tener en cuenta que el título de un cuerpo normativo **debe ser breve, concreto y reflejar objetivamente su contenido**. Así la “Guía de Desarrollo Legislativo para el Ejercicio

de la Autonomía Municipal”, publicada por el Servicio Estatal de Autonomías (SEA), respecto al uso del Título señala que: “Cuando se quiere dividir la Ley en partes principales se enumeran de forma progresiva dentro de la ley con números romanos. **Llevan un nombre que indica su contenido escrito con mayúsculas en negrilla**” (Pág. 46).

Se sugiere que se establezca un **Título I** denominado **DISPOSICIONES GENERALES**, donde mínimamente se deben consignar el objeto, **fin**, ámbito de aplicación (material, territorial, personal y temporal), principios y definiciones (si corresponde); lo cual implica ordenar muchos de estos aspectos, que ya

se encuentran regulados en el proyecto, en **capítulos** diferentes, e incorporar los restantes de acuerdo con las propuestas surgidas en los conversatorios o mesas técnicas.

A continuación del Título I DISPOSICIONES GENERALES se plantean los siguientes títulos:

- Título II DISPOSICIONES ESPECIALES
- Título III DISPOSICIONES ORGÁNICAS
- TÍTULO IV DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES
- TÍTULO V DISPOSICIONES PROHIBITORIAS Y SANCIONATORIAS
- TÍTULO VI REFORMA DEL REGLAMENTO
- TÍTULO VII DISPOSICIONES FINALES
- TÍTULO VIII DISPOSICIONES ADICIONALES
- TÍTULO IX DISPOSICIONES TRANSITORIAS
- TÍTULO X DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

2. Cabe precisar que colocar un marco normativo dentro de una norma legal, si bien es una práctica común y se ve en varios cuerpos normativos, no es aconsejable por dos aspectos:

i) La dinámica evolutiva que tiene la ciencia del Derecho puede hacer que dicho listado de disposiciones asumidas como “marco normativo” quede corta u obsoleta, lo cual implicaría reformas permanentes a dicho artículo y generaría problemas interpretativos a largo plazo.

ii) Asimismo, se considera algo reiterativo señalar que la norma se rige bajo determinado “marco normativo”, ya que es algo que se tiene sobreentendido, dado el sistema de fuentes jurídicas y los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa establecidos por el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, como fuente primigenia del ordenamiento jurídico boliviano.

3. Se deben establecer los **fin**es de la norma entendido como **las metas a las que se quiere arribar con la puesta en vigencia de la norma y su posterior aplicación**, lo cual resulta importante.

En el caso de la propuesta del reglamento general del Concejo Municipal de La Paz, el contenido desarrollado en dicho punto,

Esta sugerencia de formato es flexible, ya que el orden propuesto simplemente es para dar comprensión y mayor sistematicidad al cuerpo normativo, pero debe tener mínimamente el orden señalado por razones de técnica legislativa, pues “el orden temático debe ir de lo general a lo particular y de lo sustantivo a lo procesal” (PÉREZ BOURBÓN Héctor. “MANUAL DE TÉCNICA LEGISLATIVA”. Pág. 40). Todo lo anterior debe ser entendido como una estructura mínima y básica a efecto de una adecuada sistematización del cuerpo normativo.

se encuentra vinculado a las observaciones realizadas en la mesa técnica, especialmente respecto a la falta de conocimiento de la ciudadanía sobre la labor y rol del Concejo Municipal de La Paz; así se ha destacado, por ejemplo, la coordinación que debería existir entre las diferentes unidades del Concejo Municipal de La Paz (CMLP); Fortalecimiento Institucional; Equilibrio Político; Desarrollo Institucional; Fortalecimiento de la Democracia Participativa y de la Legitimidad Democrática; el Consenso Democrático, entre los aspectos más importantes; sin embargo, no se debe dejar de lado que cualquier norma jurídica regula su contenido de manera general y no ingresa al detalle y a la casuística, por ello, dado que muchas de las sugerencias, si bien tocan aspectos diferentes, convergen en dos ámbitos en los cuales se puede sintetizar las sugerencias:

i) Un **ámbito institucional** y,

ii) Un **ámbito democrático**, salvando que se pueda incorporar otros ámbitos para poder realizar una redacción más amplia y que cubra dichos aspectos.

4. Los **principios deben estar contenidos en un artículo que los señale y defina dentro del Título I DISPOSICIONES GENERALES**. Esta ubicación sistemática se debe a la importancia **transversal** que tienen los principios con relación a los diferentes institutos que regula el cuerpo normativo, pues, como refiere la más autorizada doctrina, "...los principios son mandatos de optimización, en tanto tales, son normas que ordenan que algo se realice en la

mayor medida posible, según las posibilidades fácticas y jurídicas.

Esto significa que pueden ser realizados en diferente grado y que la medida de su realización depende no solo de las posibilidades fácticas, sino también jurídicas. Las posibilidades jurídicas de la realización de un principio están determinadas esencialmente, a más de las reglas, por los principios opuestos. Esto significa que los principios dependen de y requieren ponderación. "La ponderación es la forma característica de los principios"⁴, consecuentemente, los principios tienen una importancia vital en la interpretación del cuerpo normativo donde figuran y son directrices de desenvolvimiento de la entidad a la cual regulan.

5. En lo referente a las atribuciones del Concejo Municipal, se debe tener en cuenta que ante la posible ausencia de la carta orgánica de un municipio, la norma supletoria es la Ley N° 482 de 9 de enero de 2014, conforme se expresa en el artículo 2, extremo que se encuentra también expresado por la **Sentencia Constitucional Plurinacional N° 2055/2012**, de fecha 16 de octubre de 2012, que señala: "La supletoriedad procederá con una norma postconstitucional únicamente en el caso específico de la legislación para los gobiernos locales, en correspondencia a lo dispuesto en el párrafo IV del Art. 284 de la CPE, que contempla el mandato potestativo de la elaboración de las cartas orgánicas. Por ello, **para aquellos gobiernos autónomos municipales que decidan no contar con una carta orgánica, serán regulados por la ley de gobiernos locales que emita el nivel central del Estado**".

4 ALEX. Robert. "EL CONCEPTO Y VALIDÉZ DEL DERECHO". Pág. 75

6. Se debe considerar, para no caer en el error, que la idea de “El Pleno del Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Municipal”, resulta contraria al nuevo diseño constitucional que establece la separación e independencia de los órganos que conforman el Gobierno Autónomo Municipal. En un caso análogo, respecto al Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, la jurisprudencia constitucional, mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 107/2015, de

fecha 16 de diciembre de 2015, ha establecido que el citado contenido es **inconstitucional**; al respecto, ha señalado:

7. En lo concerniente a las disposiciones adicionales, transitorias y finales, se ha establecido que, dentro de un plazo prudencial, el Concejo Municipal apruebe otras normas complementarias con la finalidad de que el reglamento general tenga eficacia.

“Así, la norma objeto de examen constitucional declara que la máxima autoridad es el Concejo Municipal, colocando a éste por encima del Órgano Ejecutivo, estructurando un Gobierno Autónomo Municipal en el cual se vulneran los principios de separación y coordinación que rigen la relación inter órganos que, no admite la acumulación de poder de alguno de ellos en desmedro del otro, por cuanto dentro de su sistema de gobierno, existe una división y una específica definición de sus áreas de función; por lo que, atribuir al Órgano Legislativo -Concejo Municipal-, el dominio del Gobierno Autónomo Municipal, genera que el Órgano Ejecutivo, se encuentre subordinado jerárquicamente al primero, desequilibrando la estructura de gobierno dual que rige a esa entidad autónoma municipal, quebrantando la independencia que debe regir sus ámbitos competenciales. Asimismo, al otorgar al Concejo Municipal la calidad de máxima autoridad, excede sus facultades legislativa, deliberativa y fiscalizadora, sobrepasando su cuota de poder al interior del Gobierno Autónomo Municipal, razonamientos que conducen a determinar la inconstitucionalidad de la frase “como Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Municipal” contenida en el art. 4 de la Ley del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre, por ser contrario a los preceptos constitucionales contenidos en los arts. 12, 270 y 283;...”

Estructura básica del contenido de un reglamento (experiencia La Paz)

Sobre la base de las consideraciones expuestas, en el siguiente esquema se presenta el modelo de formato utilizado para la redacción del reglamento general del Concejo Municipal de La Paz.

PROYECTO DE REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ	
RESOLUCIÓN AUTONÓMICA MUNICIPAL N° XX	
TÍTULO I	
DISPOSICIONES GENERALES	
CAPÍTULO I	
OBJETO, FINES, ÁMBITO DE APLICACIÓN, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES	
TÍTULO II	
DISPOSICIONES ORGÁNICAS	
CAPÍTULO I	
CONCEJO MUNICIPAL	
CAPÍTULO II	
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	
CAPÍTULO III	
PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL	
CAPÍTULO IV	
DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL	
CAPÍTULO V	
COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	
SECCIÓN I	
COMISIONES PERMANENTES	
SECCIÓN II	
COMISIÓN DE ÉTICA	
SECCIÓN III	
COMISIONES ESPECIALES	
CAPÍTULO VI	
DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL	
SECCIÓN I	
DERECHOS, OBLIGACIONES, PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES DE LAS CONCEJALAS Y LOS CONCEJALES	

SECCIÓN II
RENUNCIA, AUSENCIA Y PÉRDIDA DE MANDATO DE LAS CONCEJALAS Y CONCEJALES
SECCIÓN III
CONCEJALES SUPLENTES
SECCIÓN IV
CONCEJALES ASIGNADOS A LAS OFICINAS MACRODISTRITALES URBANAS Y DISTRITALES RURALES DEL CONCEJO
CAPÍTULO VII
OTRAS(OS) SERVIDORAS(ES) PÚBLICAS(OS)
CAPÍTULO VIII
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL
SECCIÓN I
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCIÓN II
DIRECCIÓN DE GABINETE
SECCIÓN III
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SECCIÓN IV
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
SECCIÓN V
DIRECCIÓN DE MEJORA CONTINUA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO I
RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL
SECCIÓN I
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL
SECCIÓN II
PROCEDIMIENTOS DE LAS SESIONES
SECCIÓN III
LICENCIAS
SECCIÓN IV
DELIBERACIÓN EN LAS SESIONES

SECCIÓN V
MOCIONES
SECCIÓN VI
VOTACIÓN EN EL PLENO Y EN LAS COMISIONES
CAPÍTULO II
INSTRUMENTOS NORMATIVOS
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN II
LEYES MUNICIPALES
SECCIÓN III
ORDENANZAS MUNICIPALES
SECCIÓN IV
RESOLUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL
CAPÍTULO III
INSTRUMENTOS DE FISCALIZACIÓN
SECCIÓN I
MINUTAS DE COMUNICACIÓN
SECCIÓN II
PETICIONES DE INFORME
SECCIÓN III
INSPECCIONES IN SITU
SECCIÓN IV
SESIONES INFORMATIVAS
SECCIÓN V
REQUERIMIENTO DE ATENCIÓN
SECCIÓN VI
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
CAPÍTULO IV
DECLARACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

	TÍTULO IV
	DEMOCRACIA DIRECTA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
CAPÍTULO I	
PARTICIPACIÓN CIUDADANÍA	
SECCIÓN I	
AUDIENCIAS PÚBLICAS	
SECCIÓN II	
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	
SECCIÓN III	
RENDICIONES PÚBLICAS	
SECCIÓN IV	
INICIATIVAS LEGISLATIVAS CIUDADANAS	
CAPÍTULO II	
CONTROL SOCIAL	
	TÍTULO V
	DISPOSICIONES SANCIONATORIAS
	TÍTULO VI
	REFORMA DEL REGLAMENTO
DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS Y FINALES	





TERCERA PARTE:

SÍNTESIS DEL DEBATE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN REGLAMENTO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN LA EXPERIENCIA DE LA MESA TÉCNICA DE LA PAZ Y SU CONSISTENCIA CONSTITUCIONAL Y NORMATIVA

La construcción participativa de instrumentos normativos no es una tarea sencilla, pero tampoco es una acción imposible. A lo largo de todo el proceso, resulta imprescindible que se tenga claro el objetivo y se cumplan a cabalidad los preceptos de la participación desde el diseño de toda la intervención o de cada uno de sus componentes, hasta la aprobación final de una propuesta de proyecto. Todas y cada una de las partes importan y deben ser cuidadosamente implementadas.

Con todo, en la experiencia del Concejo Municipal de La Paz, se llevaron a cabo cinco sesiones de trabajo y una última sesión de revisión. Cada una de las sesiones tuvo una temática específica y la metodología empleada fue una similar al desarrollo de grupos focales en los que se plantearon una serie de preguntas y aspectos a considerar que motiven el diálogo y la deliberación.

En este sentido, en la última parte de esta Guía se plantea una síntesis de los temas genéricos que puedan servir a otras experiencias como referencia, al margen del tratamiento de temas expresa-

mente relacionados con la experiencia de La Paz u otro municipio que asuma esta tarea.

3.1. SOBRE LA ESTRUCTURA DEL CONCEJO MUNICIPAL

Se hizo énfasis en que la estructura del Concejo Municipal puede coadyuvar al logro de sus objetivos y funciones, evidenciando la necesidad de pensar en una estructura acorde a normativas de orden superior, idealmente la Carta Orgánica del Municipio de La Paz o, ante su ausencia, a la ley nacional supletoria respectiva (en este caso la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales). De esta manera, se evitan modificaciones muy prontas, además de adaptar la estructura a la propia forma de elección de concejales y de poder orientarla al logro de resultados. Esto puede alcanzarse a partir de la institucionalización del órgano legislativo municipal y la coordinación entre unidades e instancias en su interior por encima de lo político, asumiendo que el Concejo Municipal es una instancia política, pero que esas lógicas no debieran permear más allá de las y los concejales hacia las instancias orgánicas.

3.1.1. Definición de la Directiva del Concejo

Este punto presentó divergencias entre la lógica de definición de la Directiva del Concejo; por algunos, criticada por favorecer a la mayoría política mientras que, por otros, ensalzada por su compromiso de respeto a las minorías (algo no presente en varios otros concejos municipales del país).

3.1.2. Coordinación interinstitucional fuera del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

La idea principal fue que el Concejo Municipal debiera buscar formas de acercamiento con los municipios de la región metropolitana de La Paz y de una mayor coordinación interinstitucional y multinivel.

3.1.3. Débil capacidad de gestionar institucionalmente

Las intervenciones estuvieron marcadas por la necesidad de valorar y hacer valorar la función legislativa, la fiscalizadora y la deliberativa del Concejo Municipal, sin enfocarse en la imposibilidad de gestionar. Esta perspectiva fue ampliamente compartida por las y los participantes, llegando a recolectar ideas específicas sobre la necesidad de un procedimiento legislativo apartidario, una

acción de fiscalización seria y proactiva que no tenga objetivos políticos (o politiqueros) y la necesidad de mayor visibilización de la producción legislativa, así como de contar con más espacios de participación ciudadana.

3.2. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS

3.2.1. Producción de normativa

El diagnóstico de los procedimientos legislativos se concentró en la falta de diferenciación entre tipos de normas, tipos de temas y tipos de mayorías necesarias para la aprobación, así como en la ausencia de iniciativa propia del Concejo Municipal, por lo que se debe procurar la mejora de esa capacidad, así como la incorporación del uso de tecnologías o la diferenciación entre tipos de mayorías.

Se hizo énfasis en que el Reglamento General debiera contemplar todo el proceso, incluyendo la sanción, la promulgación y la publicación de normas y sus diferencias, y, segundo, la necesidad de definir alternativas o vías de escape para la legislación obstaculizada.

Atendiendo a la relación entre los órganos Legislativo y Ejecutivo, en cuanto a si debieran tener procedimientos diferenciados para las iniciativas legislativas provenientes del propio Concejo y las que

Al cierre de la primera sesión de trabajo, las y los participantes volvieron a reconocer la necesidad de enfocar las propuestas hacia nociones más complejas y delicadas, como la función legislativa, la función de fiscalización y la función de deliberación, así como a la necesidad de promover más la participación ciudadana.

emanan del órgano Ejecutivo, la respuesta unánime fue negativa, indicando que el procedimiento legislativo es uno indistinto de su procedencia, además de la necesidad de cuidar relaciones con el Ejecutivo en favor de la gestión pública municipal y la atención a las necesidades ciudadanas.

Se hizo una crítica al cambio en la interfaz de la Gaceta Municipal que la ha convertido en instrumento muy poco amigable y de difícil uso, a lo que se recomendó restituir un instrumento propio del Concejo Municipal y autónomo respecto del órgano Ejecutivo.

3.2.2. Procedimientos no legislativos

El diálogo y análisis sobre los procedimientos no legislativos daba cuenta de una burocracia, muchas veces innecesaria, producto del incumplimiento de plazos y de la falta de coordinación entre algunas instancias al interior del Concejo, y las principales proposiciones estuvieron centradas en la necesidad de mejorar la coordinación principalmente entre direcciones del propio Concejo. Para esto se contempló la unificación de dependencia de las direcciones de una misma instancia dentro de la Directiva o la incorporación de especificaciones sobre reuniones amplias.

Respecto a la función deliberativa del Concejo Municipal, se propuso que ésta debiera adquirir un procedimiento claro donde cada quince (15) o treinta (30) días se convoque a la población a partir de su territorio para deliberar temas estratégicos.

3.2.3. Conformación de la Directiva y Comisiones

Sobre la conformación de la Directiva, se hizo énfasis en que la elección de esta instancia debería ser ilimitada. Se argumentó que los límites a la reelección aplican para cargos de elección popular y ya hay una limitación para la posición de concejales, además de los cargos de mayor jerarquía al interior del Concejo. Y respecto de las comisiones, se propuso revisar sus competencias y profundizar en la regulación.

3.2.4. Desarrollo de las sesiones

Respecto de las sesiones, se planteó complementar lo que indica el Reglamento actual sobre la permanencia de los concejales en las sesiones y la moción de cuarto intermedio, incorporando sanciones en caso de incumplimiento y aclarando el rol de presidencia, respectivamente.

3.2.5. Acto de votación al interior del Concejo

Se trata de la regulación explícita y clara de las abstenciones como forma de votación válida en los procesos de aprobación de normativa u otros instrumentos propios del Concejo. Al respecto, más que una situación propia del reglamento actual, las y los participantes hicieron referencia a experiencias vividas que evidencian la forma en la que se asumen las abstenciones y el impacto que esto genera sobre el resultado final de cada votación, por lo que es menester que su funcionamiento se ajuste al reglamento.

3.2.6. Concejales y concejales suplentes

Respecto a las y los concejales suplentes, se propuso emular lo que sucede en el ámbito nacional y dotar de cierta responsabilidad a las autoridades ediles electas, sea con tareas de tipo administrativo que reduzcan la carga a los concejales titulares y/o con la administración de las oficinas macrodistritales, lo que implica mayor cercanía a la población.

Respecto a las asesorías que contrata cada concejal, si bien se mantuvo el fundamento de la libre designación por cada autoridad electa, se propuso que exista una base mínima de requisitos para un perfil de asesores con el fin de profesionalizar la asesoría.

3.3. LABOR DE FISCALIZACIÓN

La labor de fiscalización, catalogada en general como inefectiva y obsoleta, aunque con diferencias entre las razones de tal valoración, algunas posturas abogaban por un problema de los propios mecanismos de fiscalización, mientras que otros planteamientos apuntaban a la aplicación de los mecanismos como el problema.

Las proposiciones estuvieron en línea de aglomerar todo lo relativo a la fiscalización en un solo título dentro del reglamento, al mismo tiempo que se debe definir a cabalidad qué es la fiscalización y cuál es su significado para la gestión pública municipal, atendiendo los elementos conceptuales de la fiscalización. Esto quiere decir, qué es la fiscalización, cuál es su objeto (qué se debe fiscalizar), cuáles son sus fines u objetivos

(para qué se fiscaliza), e inclusive cuáles son sus ámbitos de aplicación, alcances y limitaciones.

Se planteó repensar los instrumentos vigentes mientras que, por otro lado, se propuso modificar los procedimientos en términos de plazos y sanciones, principalmente.

Sobre los alcances, se propuso, de manera concreta, que se explicita el alcance de la fiscalización como labor a cualquier obra, servicio, o ámbito que esté financiado, total o parcialmente, con recursos municipales. De manera similar, se planteó que los alcances de cada instrumento sean definidos y diferenciados entre sí. Con esto se busca brindarles un norte institucional a los actos de fiscalización.

De manera concreta, siguiendo la propuesta de debate, se atendieron los instrumentos de fiscalización en sí mismos, las sanciones ante su incumplimiento y los procedimientos para su aplicación; el último de manera más amplia, dado un consenso en que el principal problema es la operativización de los instrumentos existentes; y se concluyó en recuperar experiencias previas o prácticas habituales en la labor del Concejo, pero que no están en el reglamento actual. Se trata del usuario simulado, la fiscalización in situ o inspecciones, con la sugerencia de que para lo segundo se convoque y se haga parte al Ejecutivo municipal a partir de algún funcionario.

Una propuesta fue que los resultados de las peticiones de informe, especialmente la oral, contemplen la incorporación del voto de censura, ante la insuficiencia de la comparecencia de los

convocados, además del voto de confianza. La tercera propuesta concreta iba en línea con ampliar la lógica de sanción no solamente a la autoridad o funcionario ejecutivo que incumpla con el instrumento activado, sino también hacia los propios concejales que fallen en hacer un seguimiento y evidenciar resultados de su acción, sean éstos favorables o no.

Sobre la forma de asignación u organización de las tareas de fiscalización, se propuso que se asigne una obra o servicio a cada concejal al inicio de cada gestión sobre la que tiene la obligación de fiscalizar, sin perjuicio que realice otros procesos de fiscalización.

Sobre los plazos, se reconoció que no son reales, por lo que se sugirió revisarlos en detalle, donde un planteamiento fue el de regular la cantidad de veces y de tiempo que una autoridad ejecutiva puede excusarse ante una petición de informe oral.

Respecto de los actores involucrados, se identificó como excesivamente burocrático que todos los instrumentos pasen por el Alcalde, al igual que tengan a la Dirección de Gabinete del Concejo Municipal como intermediario; ante esto, se propuso diferenciar entre instrumentos de mayor o menor peso, en lo que se pide y la sanción que se aplique ante incumplimiento, y relacionarlos con la necesidad de que pase por el Alcalde para su respuesta. Asimismo, que la Dirección de Gabinete no sea un intermediario, sino que se pueda enviar ciertos instrumentos de manera directa desde cada concejal o comisión, y que la Dirección sea solamente notificada para mantener en archivo.

Finalmente, se destacó la necesidad de hacer seguimiento y monitorear los instrumentos de fiscalización activados, tanto para evitar los vencimientos de plazos como para

identificar la atención de parte del Ejecutivo, y se propuso que, ante incumplimiento y en lugar de sanción, se puedan activar acciones directas para asegurar la atención de las intenciones de cada instrumento de fiscalización.

Por otra parte, las conclusiones en torno a las sanciones plantearon considerar la acumulación de estas que deriven en sanciones mayores; además que se contemple la incorporación del voto de censura, así como el voto de confianza. Asimismo, la sanción debería abarcar no solamente a la autoridad o funcionario ejecutivo que incumpla con el instrumento activado, sino también al concejal que falle en el seguimiento y obtención del resultado de su acción, sea favorable o no. Sin embargo, se planteó la necesidad de implementar un mecanismo que sirva como incentivo y no solamente como castigo.

3.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Lo vigente y lo ausente de la participación ciudadana en el Reglamento del Concejo Municipal fue parte del debate. Sobre lo vigente, el diagnóstico identificó que las **audiencias públicas** tienen un procedimiento muy complejo para su activación debido a un exceso de burocracia y formalidades, dando como resultado que estas audiencias relajen sus requisitos y formalidades. En este sentido, se requiere **explicitar el procedimiento que debe seguir su activación, desarrollo y resultados**; además de diferenciar por lo menos dos tipos de audiencias públicas, las que se desarrollan en el pleno del Concejo y las que tienen lugar en comisiones, debiendo ser las segundas mucho más sencillas en su activación por parte de la ciudadanía.

Sobre las audiencias públicas, el debate y análisis en la mesa técnica concluyó en que uno de los principales problemas, más allá de la cuestión de requisitos para su activación ya mencionada, es que no se cuenta con

resultados concretos, producto de las audiencias, por lo que no hay ningún impacto real sobre la gestión del Concejo o del Gobierno Municipal en su conjunto. Ante esto, se propuso establecer la obligación de que la audiencia derive en algún tipo de compromiso que sea susceptible de seguimiento. Por la naturaleza de las audiencias experimentadas por las y los participantes, se planteó abrir la posibilidad de convocar a funcionarios o autoridades del Ejecutivo si el tema de la audiencia así lo mereciera.

En una línea similar, el diagnóstico planteó la necesidad de repensar las **sesiones macrodistritales**, por lo que del debate y análisis surgieron dos propuestas:

- La primera de ellas se concentró en definir la realización de, al menos, dos sesiones de manera obligatoria, al inicio y al final de cada gestión, donde la primera derive en el recojo de necesidades y compromisos concretos que sean susceptibles de seguimiento durante la segunda sesión.
- La segunda propuesta, contemplando el carácter territorializado de las sesiones macrodistritales, planteó regular experiencias anteriores como la participación de las y los subalcaldes en estas sesiones; con esto se delimitarían las sesiones macrodistritales a espacios de atención de demandas y preocupaciones ciudadanas respecto de la gestión en su territorio, diferenciándose así de otros instrumentos como las rendiciones de cuentas o los espacios de deliberación estratégica.

En segunda instancia, el diagnóstico se concentró en los elementos ausentes dentro del reglamento. Así, se señalaron ausencias respecto a:

- Las iniciativas legislativas ciudadanas
- Las solicitudes de información de parte de la ciudadanía
- Los procesos de rendición de cuentas.

Estos vacíos apuntaron a la falta de institucionalización de estos mecanismos y el hecho de que al no haber procedimientos específicos para su uso se convierten en un contraincentivo a la participación ciudadana. En este marco, el debate y las propuestas se centraron en tres temas específicos:

- Atender las veedurías del control social que debieran estar reguladas en el reglamento, en tanto sus alcances y limitaciones dentro de las sesiones, especialmente respecto del nivel de participación de las personas delegadas para tal tarea.
- Que las rendiciones públicas de cuentas del Concejo Municipal y de las y los concejales se norme para clarificar tiempos, procedimientos, resultados esperados y temas; bajo la noción, sobre este último punto, de que el Concejo, por su naturaleza, no debiera realizar una rendición de cuentas típica concentrada en temas financieros, sino que debe versar sobre su actividad fiscalizadora y legislativa, principalmente.
- Por último, la propuesta sobre la iniciativa legislativa ciudadana postuló diferenciar la iniciativa directa de la indirecta y aclarar el tipo de tratamiento por parte del Concejo,

mínimamente en tanto plazos, presencia de la ciudadanía y participación en la deliberación y resultados mínimos.

Sobre las **veedurías del control social y las solicitudes de información de parte de la ciudadanía**, se postuló la necesidad, primero, de recuperar lo que dice la legislación municipal al respecto; es decir, poner en el reglamento lo que ya está definido en la Ley Municipal de Participación Ciudadana y Control Social para las veedurías y lo que dice la Ley Municipal de Acceso a la Información Pública. Con esto, recién es posible complementar cualquier vacío que se identifique con relación al rol y los procedimientos por parte del Concejo Municipal.

En una línea similar, aunque sin normativa vigente sobre las **rendiciones públicas de cuentas**, se definió aceptar las sugerencias del diagnóstico, que el procedimiento y sus alcances debieran estar regulados en el reglamento.

Respecto de la cuestión de las **iniciativas legislativas ciudadanas**, también se aceptó la idea presentada en la exposición de diferenciar entre las iniciativas directas y las indirectas. Para las iniciativas directas, que se espera se presenten ya como un proyecto de ley articulado, el procedimiento no fue mencionado en cuanto a diferenciación del procedimiento regular, pero sí se recomendó que se indique un resultado concreto y el nivel de participación de la ciudadanía. En cambio, para las iniciativas indirectas, que se asumen más como propuestas de agendas temáticas, sí se propuso que gocen

de obligatoriedad y prioridad en su tratamiento, estableciéndose plazos concretos y resultados a alcanzar. Para facilitar estas activaciones se planteó la utilización de un instrumento (como una matriz) que permita identificar bien las temáticas y facilitar su seguimiento.

Finalmente, se abordó también, la cuestión de la **proactividad del Concejo**, en cuanto llevar adelante espacios de conversatorios y talleres con la ciudadanía para explicar su rol, sus competencias, sus funciones y las formas de involucramiento de la población con su labor.

3.5. APROBACIÓN DE LA MESA TÉCNICA

La propuesta de Reglamento General del Concejo Municipal de La Paz está conformada por 177 artículos ordenados en seis títulos:

- Disposiciones Generales
- Disposiciones Orgánicas
- Disposiciones Procedimentales
- Democracia Directa
- Participación Ciudadana y Control Social
- Disposiciones Sancionatorias y Reforma del Reglamento, incorporando, además, una serie de Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales.

La propuesta tuvo un desarrollo amplio y participativo que derivó en la aprobación unánime de todo el contenido, con excepción de dos puntos específicos. Por un lado, el numeral 6 del artículo 47, referido a incompatibilidades de las (os) concejales (es), que dispone específicamente la dirigencia o representación de organizaciones territoriales,

sectoriales o funcionales del Municipio de La Paz como incompatible con cualquier cargo, electo o no electo, en el Concejo Municipal de La Paz. Este punto generó un debate intenso en el que se expresaron dos puntos centrales a favor y en contra.

- El argumento, en pro de este punto en el reglamento hacía referencia a la necesidad de independencia de quienes asumen alguna función pública en el Concejo Municipal de la dirigencia social para evitar, por una parte, uso indebido de influencias para un sector de manera preferencial sobre otro, y, por otra, para evitar la instrumentalización de las (os) dirigentes sociales de parte del aparato burocrático municipal.
- En cambio, el argumento contrario al punto, hacía referencia a la imposibilidad de restricción del derecho a la participación social que no es incompatible con la representación en órganos como el Concejo Municipal, justamente porque muchas veces se llega a tales cargos a partir de la representación social. Este aspecto, finalmente, no pudo llegar a una decisión unánime, aunque sí hubo una mayoría hacia la primera opción.

La segunda cuestión crítica que no se pudo saldar en el debate versa sobre el artículo 110 de la propuesta, que hace referencia a la participación de Presidencia de la Directiva del Concejo Municipal en los debates. Separando este punto

de las condiciones para el voto de quien preside, este debate se centró en si esta misma persona puede participar libremente de los debates del pleno o si debiera seguir un procedimiento específico para ello.

- El argumento a favor de mantener este artículo planteaba la necesidad de evitar la monopolización de la palabra dado que quien preside las sesiones del pleno es quien, también, organiza el debate y otorga la palabra, por lo que, a partir de experiencias pasadas, se busca aplicar un procedimiento formal para evitar estas situaciones.
- En cambio, la posición en contra del artículo, que pugnaba por descartarlo de la propuesta, refirió a la inutilidad real del planteamiento y que se trataba más de un exceso burocrático para el desarrollo del debate y que, además, podría ser instrumentalizado políticamente para asegurar o perjudicar a mayorías o minorías aritméticas. Al final, el artículo no pudo llegar a una decisión unánime, aunque hubo mayor inclinación por su remoción.

La opción que tomaron las y los participantes de la mesa técnica fue mantener los dos elementos que no tuvieron unanimidad dentro de la propuesta, pero con una aclaración sobre su situación de acuerdo y aprobación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alexy, Robert. *"El Concepto y Validez del Derecho"*. Pág. 75

Pérez Bourbón, Héctor. *"Manual de Técnica Legislativa"*. Pág. 40.

Rodríguez Ostría, Gustavo. 1995. *Estado y municipio en Bolivia*. La Paz: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente / PNUD.

Servicio Estatal de Autonomías. *"Guía de Desarrollo Legislativo para el Ejercicio de la Autonomía Municipal"* (Pág. 46).

Tudela Aranda, José. 2010. *"La Administración parlamentaria en la encrucijada de la renovación"*. En *Corts: Anuario de Derecho Parlamentario*, Número 23, pp. 157-191.

Zuazo, Moira. *"Bolivia: cuando el Estado llegó al campo. Municipalización, democratización y nueva Constitución"*. En Moira Zuazo, Jean-Paul Faguet y Gustavo Bonifaz (eds.), *Descentralización y democratización en Bolivia. La historia del Estado débil, la sociedad rebelde y el anhelo de democracia*. La Paz: Friedrich Ebert Stiftung.





Hanns
Seidel
Stiftung

